

## CUANDO EL MERCANTILISMO SE EXPANDE COMO UN VIRUS

La educación no puede ser analizada en su «efectividad» por un economista. No llevaríamos a ningún niño enfermo a consultar con un economista para que lo cure ni le llevaríamos a un economista nuestro vehículo averiado. Como es obvio, lo correcto sería que cada porción de la realidad sea mirada desde su enfoque disciplinar, profesional, de acción, de concreción, de destino final. Sin embargo, cuando desde un gobierno se impone un criterio económico y mercantilista podemos quedar atrapados en lógicas que son ilógicas o que no pertenecen a la naturaleza de los temas a resolver. Veamos, el riesgo de una visión sesgada induce a graves errores conceptuales, pero, además, es una manera capciosa de generar una falsa identidad de esa parte de la realidad. El objetivo es justificar, a partir de ese cambio, la toma de decisiones que van a afectar el desarrollo de actividades y, por lo tanto, a los destinatarios de esas actividades y a nuestras vidas. En otras palabras, es lo que sucedió históricamente: la transferencia de recursos desde los sectores más pobres y vulnerables hacia los sectores que más acumularon.

Así las cosas, trabajador pasa a ser *consumidor*; valor agregado, *cadena de costos*; inversión se convierte en *gasto* o en *pérdida* (en cuanto gasto no está mal según el caso); distribución del presupuesto se lee en términos de *déficit fiscal*. Con estos «nuevos» conceptos se analiza la realidad en la actualidad y se opera sobre ella. Por eso, es necesario poner en discusión estos parámetros en sus dos dimensiones: cualitativa y cuantitativa. Esto es importante porque este cambio convierte los derechos que el Estado debe garantizar en mercaderías, que dependerán del bolsillo de cada uno para acceder o no. Por ejemplo, el servicio de la luz, en veintiséis meses aumentó el 2.800%. Esto ocurrió porque se privilegió el hecho económico de que la empresa privada, proveedora (no productora) de energía eléctrica, no pierda dinero. El asunto es que en realidad, cuando las tarifas eran 2.800% más bajas, tampoco perdían dinero porque el Estado nacional pagaba la diferencia, beneficiando a los ciudadanos usuarios



Esta obra está bajo una  
Licencia Creative Commons  
Atribución-NonCommercial-SinDerivadas  
4.0 Internacional

porque la realidad de la economía permitía realizar esa bonificación. Lo inexplicable es que para los usuarios las tarifas subieron a cifras siderales, mientras que el Estado nacional continúa subsidiando a las empresas privadas proveedoras del servicio. ¿Entonces?

La salud, los hospitales públicos son y han sido ejemplo de atención y de prestaciones. Su existencia se corresponde con un criterio humanista de la salud: que todos los ciudadanos tengan acceso. La mirada economicista encuentra en esta institución una canilla que gotea permanentemente, sin entender que debajo de la gota hay un recipiente de contención social, que no solo impide el derrame de recursos, sino que se convierte en un reservorio de los mismos. De esta manera, la salud pública, gratuita, es un derecho garantizado, pero el criterio mercantilista habilita a ajustar esos recursos y los salarios. Así, durante años, han repetido, sin mucho fundamento, que los trenes que funcionan diariamente le «cuestan» al Estado uno, dos o tres millones de pesos diarios y que eso es un déficit que hay que corregir aumentando el costo del pasaje. ¿Cuál es el problema de gastar el dinero recaudado en el funcionamiento de los trenes, si para eso es que el Estado cuenta con esa plata? ¿Qué tiene de malo que el Estado dé a sus ciudadanos un muy buen servicio de transporte? ¿Para qué otra cosa va a guardar el Estado el dinero, sino para hacer funcionar los servicios públicos que la población necesita? Una y otra vez se repite cuánto le cuesta al Estado cada alumno universitario que no se recibe y la respuesta correcta es «nada». En todos los casos están midiendo en términos cuantitativos, exclusivamente, cosas o asuntos que si bien es necesario cuantificarlos para su funcionamiento, también es necesario poder evaluarlos cualitativamente por los beneficios que producen a toda la sociedad. Esto es, pensar en que muchas personas puedan acceder al sistema para aprender a aprender, a desarrollar pensamiento crítico, independientemente de que se reciben o no.

Lo que hay que entender es que cuando el Estado «gasta plata» en transporte, en salud o en educación lo hace porque para eso es que recauda fondos por medio de los impuestos (centralmente el IVA que se aplica a todos los productos que cotidianamente consumimos y de las escuetas retenciones a las exportaciones). Por lo tanto, el Estado tiene plata para gastar, es más, debe ser gastada porque es su obligación hacerlo porque para eso la recauda.

En términos más estructurales, cuando siguiendo el mismo razonamiento economicista un gobierno le quita recursos financieros al CONICET, al INTI, al SENASA, que son organismos de control de calidad de la producción argentina, no solo ocurre que la población corre riesgos de salud, de integridad respecto de sus bienes o servicios para desarrollar sus vidas, sino que además se produce otro fenómeno: se vacían los espacios que acreditan la calidad del trabajo nacional. Y esto es así porque para un criterio economicista de la vida, no importa lo que se consuma, no importa su calidad pero tampoco importa su origen. Lo único que importa es que sea más barato, lo cual no es necesariamente cierto, ya que muchos productos importados, primarios o manufacturados son decididamente más caros.

Así, otra consecuencia de la aplicación de este criterio, del orden de lo cualitativo, repetido insistentemente por los medios de comunicación en todo su rango, es que se instala la idea de que lo nacional y lo estatal son de mala calidad. Este cambio de paradigma, de visión de los temas, genera un profundo desprecio sin fundamento, que es el caldo de cultivo necesario para la irrupción de lo privado y lo importado, que generalmente andan de la mano en detrimento de nuestras empresas.

En este esquema, donde la industria nacional es vituperada, mal vista, donde la cultura nacional pierde crédito frente a los espejitos de colores foráneos (y de eso nuestro continente sabe bastante y aún hoy seguimos pagando las consecuencias), ¿qué rol le queda al diseño industrial? Si las economías regionales pierden capacidad productiva frente a la embestida importadora, si los organismos de investigación, de innovación tecnológica y de control de calidad de la industria nacional pierden capacidad de trabajo por falta de presupuesto y porque hay reducción de personal con la excusa de que estos organismos dan pérdida, ¿cómo vamos a sostener la producción industrial? Y si no hay producción industrial ni producción primaria, salvo excepciones como la soja, ¿en qué se convierte nuestro país? Si infinidad de empresas pymes cierran porque no pueden hacer frente a la facturación de servicios y así se manifiesta la diferencia entre beneficiados y damnificados por esta economía, ¿podríamos concluir que el desarrollo industrial ha dejado de ser un objetivo, una política de Estado? Si no hay exportaciones; si baja el consumo interno como consecuencia de la inflación; si el Estado pierde capacidad de recaudación, ¿cómo financia las actividades propias? ¿Otra vez con endeudamiento y a cien años? La educación, la salud, el transporte, la industria, la cultura, en resumen, la soberanía, ¿quién la ejerce?

La respuesta es sencilla: otros. Ya no el Estado argentino, sino otros con capacidad financiera, pero sin patria: los capitales transnacionales. Y así nuestra nación se convierte en un satélite financiero. Los propios diseñadores industriales tenemos que cuestionar este proceso de destrucción de la matriz cultural y productiva, y actuar en consecuencia, porque nuestro rol es estratégico en el desarrollo industrial. Pero para eso debe haber desarrollo.

Los ciudadanos y los diseñadores deberíamos estar muy atentos a estos cambios cíclicos que nos ponen en lugares claves para el desarrollo, como ocurrió en el ciclo precedente, o que nos quitan protagonismo cuando licúan el marco institucional y operativo de las políticas públicas que van desapareciendo.

En síntesis, en el problema de fondo es lo que no se ve. Toda esta argumentación pierde sentido si no somos capaces de darnos cuenta de qué se trata finalmente. Y lo que no se ve es el grado de colonización que portamos sin darnos cuenta y que nos hace permeables a argumentos que, aun en contra de nuestros intereses, forman parte de nuestra realidad sin que podamos reaccionar frente a ella. Esta colonización cultural es tan profunda y está tan arraigada, que no la notamos. Sin embargo, hace que actuemos así: soportando y justificando hechos, decisiones, anuncios que suceden ante nuestra mirada con una naturalidad pasmosa, hasta que en algún momento toca

alguna fibra personal. Mientras tanto lo vivimos como algo normal, como lo que a fuerza de ser repetido se instala, y ya no lo vemos. Esto sucede porque otros factores culturales actuaron sobre nuestra subjetividad para veamos con normalidad aquello que nos daña como sociedad, en lo inmediato y a largo plazo también.

No lo permitamos. Volvamos a ser protagonistas. Defendamos nuestro espacio y los espacios de todos, defendamos todo aquello que nos permitió crecer y ser, por lo menos por unos años, un país más justo y soberano.



Foto sacada por ADULP (2018)

DI Ana Bocos  
Directora de *Tableros*  
Jefa del Departamento de Diseño Industrial